

EVANGÉLICOS Y POBREZA. REFLEXIONES A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS EN COLOMBIA

*Fabio Lozano*¹

Cuando pensamos en las relaciones entre pobreza, religión y justicia social en América Latina y el Caribe, uno de los primeros debates que salta a la escena, especialmente si nos concentramos en las últimas décadas, es acerca del papel que están cumpliendo las iglesias cristianas, llamadas pentecostales por algunos, evangélicas, o sectas protestantes por otros. Estas iglesias, y especialmente su crecimiento exponencial a finales del siglo XX, han sido el fenómeno de mayor relevancia en la conformación de los territorios religiosos en nuestro continente; y, como todos bien sabemos, las explicaciones del hecho se debatieron en torno a la intervención imperialista del capitalismo para frenar los efectos del cristianismo de la liberación o, en contraposición, la reacción a la anomia y a la falta de democracia que la hegemonía católica había impuesto.² No pretendo situarme en este debate, cuya importancia para las ciencias sociales no pongo

¹ Teólogo y master en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) y Ph. D. en Estudios sobre América Latina de la Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia). Profesor e investigador, miembro del grupo de trabajo de CLACSO, “Religión y Sociedad” y del grupo de investigación “Conflicto, Regiones y Sociedades Rurales”, de la Pontificia Universidad Javeriana.

² Manuel Marzal (2002: 489-491) hace una rápida síntesis de dicha discusión, comentando a Stoll (1990). Posiciones diversas al respecto se pueden encontrar, por ejemplo, en Jean-Pierre Bastian (1997: 73-97) y en Yvon Le Bot (1995).

en duda, pero algunas de cuyas comprobaciones obedecen más al ejercicio del espionaje internacional que a la acción de la investigación social.

Quisiera más bien preguntarme, por una parte, sobre lo que efectivamente están haciendo dichas iglesias, en cuanto a si están ayudando o no a la construcción de dinamismos de superación de la pobreza y de generación de condiciones de mayor justicia social; y, por otra parte, sobre la significación de dicha acción o inacción en el contexto de la dinámica de empobrecimiento en Colombia. Para responder estas preguntas pretendo describir el fenómeno de la acción social de las iglesias evangélicas, recurriendo a datos empíricos, recogidos en una investigación estadística, desarrollada a petición de CEDECOL.³ Dicha investigación se realizó para dimensionar la acción social de las iglesias evangélicas en el país, y tuvo, como uno de sus componentes, la aplicación de una encuesta a una muestra representativa de pastores y encargados de iglesias locales en el ámbito nacional.⁴ Posteriormente, realizaré algunas reflexiones analíticas sobre la significación de dicha acción. Antes de iniciar el recorrido, hago una introducción en la que destaco algunos de los elementos característicos de los recientes dinamismos generadores de pobreza en la situación colombiana.

LAS RECIENTES DINÁMICAS DE EMPOBRECIMIENTO

Es bueno, antes de analizar algunos resultados de dicha investigación, hacer una breve reflexión y ubicación con respecto a la significación de la pobreza en Colombia. Las instituciones estatales presentan cifras de medición de la pobreza que, para el 2004, variaban entre el 53,2% y el 66,3%, y para el caso de la indigencia, entre el 17,4% y el 31,1%.⁵ Por las distancias entre estas cifras se presentan debates tras los cuales, sin duda, se esconden intencionalidades que no solamente tienen que ver con los condicionamientos e intereses intra-

³ CEDECOL es la más importante confederación de iglesias evangélicas en Colombia. La investigación fue realizada con la financiación de la EED y de Pan para el Mundo. Las afirmaciones aquí hechas solamente comprometen al autor de este artículo y no coinciden necesariamente con las conclusiones y afirmaciones del estudio mencionado. Los datos estadísticos utilizados aquí como referencia son resultado de dicha investigación, cuyo informe, aún no publicado, aparecerá bajo mi autoría, con el título “La acción social de las iglesias evangélicas en Colombia. Una aproximación estadística”.

⁴ Se trata de una encuesta a iglesias locales; no hay datos de agencias de cooperación internacional de tipo confesional, ni de programas emprendidos por obras de carácter nacional. La investigación se circunscribió también a iglesias protestantes y evangélicas que, incluso cuando se declaren independientes, no hayan sido rechazadas por el Consejo Mundial de Iglesias. Es decir, quedaron por fuera los Mormones, los Testigos de Jehová y los Adventistas.

⁵ Para mayor precisión sobre la discusión y las cifras aportadas por las diferentes instituciones, véase Contraloría General de la República (2004).

teóricos, ligados a las escuelas y tradiciones investigativas, sino intereses extra-teóricos, ligados a las legitimaciones de los poderes y los gobiernos vigentes. Ahora bien, este tipo de datos, que sin duda pueden servir como indicadores de ciertos aspectos de la realidad, pero que por su concepción universalizante despersonalizan los rostros de los empobrecidos, no nos muestran en su complejidad los contrastes entre unas regiones y otras, ni las enormes inequidades entre unos sectores sociales y otros, ni, lo que es más neurálgico, manifiestan los procesos y mecanismos de generación y consolidación de dominación que instituyen la pobreza.

Hablar de la pobreza en Colombia no es fácil, pues las últimas décadas han sido un tiempo de un claro ejercicio de dominación y empobrecimiento para masivos sectores de la población; ejercicio que, sin embargo, ha estado acompañado de crecimiento económico para el beneficio de otros sectores sociales específicos; con lo cual el país aparece ante la comunidad internacional como una nación democrática y en vías de desarrollo. La propaganda oficial añade que los sufrimientos de la patria provienen de la acción de unos cuantos grupos terroristas que, además de sembrar el caos, impiden el desarrollo. En otros términos, hablar de la pobreza, en general en el mundo, pero muy especialmente en Colombia, no es referirse únicamente a las tasas de analfabetismo, al acceso a los servicios de salud, vivienda, empleo y seguridad, sino mirar el conflicto social, político y militar existente, detrás del cual se esconden intereses económicos nacionales y transnacionales.⁶

En una clara alianza, diversos sectores económicos, políticos, militares nacionales e internacionales, dentro de los cuales se incluyen fuerzas armadas, partidos políticos, medios de comunicación, empresas multinacionales y mafias del narcotráfico, participaron en la creación, financiamiento, entrenamiento, apoyo logístico, informativo y de legitimación social de un movimiento que se conoce como paramilitarismo, y que no se agota en quienes portan las armas, un buen sector de los cuales ahora se ha desmovilizado, en un acto que hace parte de la misma estrategia. Este movimiento tuvo como propósito la eliminación de todo tejido social que pudiera oponerse a la consolidación de los intereses de los capitalistas y de los grandes terratenientes nacionales e internacionales, bajo la disculpa de la lucha contra la guerrilla y sus atrocidades. De estos sectores muchos participaron directamente, otros en forma más indirecta y otros

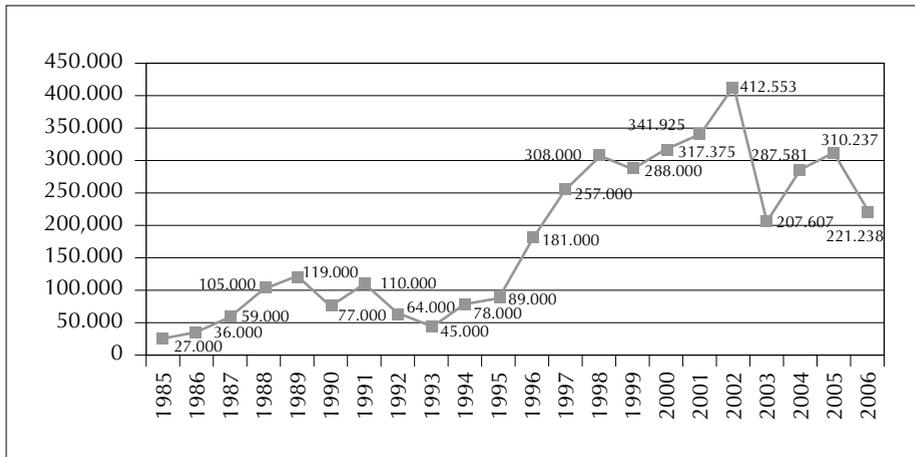
⁶ Podemos encontrar una expresión de este hecho en el último *Informe Nacional de Desarrollo Humano*, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se dedicó especialmente al análisis de la complejidad del conflicto y a la búsqueda de alternativas frente a éste. De ahí su título: *El conflicto, callejón con salida* (PNUD, 2003).

permanecieron callados, aprovechando las ventajas que las acciones de los demás les brindaban.

Los resultados de esta acción fueron contundentes, tanto en el empobrecimiento generado como en el enriquecimiento logrado y en la imposición de un poder económico, político, militar y cultural. Se generó así una hegemonía favorable, por una parte, al modelo neoliberal, y por otra, al autoritarismo de un poder unipersonal. Algunas expresiones de esos resultados son:

- Durante los años 1985 a 2006 hubo cerca de cuatro millones de desplazados. Es decir, personas que se han visto obligadas a salir de su lugar de vivienda y trabajo por asesinatos de familiares, amenazas y otras violaciones a los derechos humanos, y que, a diferencia de los refugiados, no han pasado la frontera del país, pero han perdido tanto sus bienes materiales, como muchos de sus lazos culturales, sociales y políticos (ver gráfico 1). A ellos se suman millares de confinados, es decir, poblaciones a las que se les impide la libre movilización, comunicación y transporte de alimentos, medicinas, etc., completando así un panorama de dominación por parte de actores políticos armados ilegítimos.

Gráfico 1
Tendencias del desplazamiento forzado 1986-2006



Fuente: CODHES. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

- El asesinato de prácticamente la totalidad de los miembros de un partido político de oposición, la Unión Patriótica, muchos de los cuales habían sido elegidos democráticamente como concejales, alcaldes, senadores o miembros de otras corporaciones públicas.

- El asesinato de candidatos de diversos sectores políticos, que podían resultar incómodos, o cuya información podría poner en peligro los intereses de los generadores de esta iniciativa, muy especialmente su vinculación con el narcotráfico.

- El masivo asesinato, destierro, desaparición, silenciamiento o cooptación de líderes de movimientos sociales (sindicatos, juntas de acción comunal, organizaciones indígenas y de afrocolombianos, organizaciones de derechos humanos, catequistas, periodistas, universitarios). En el caso del sindicalismo, en los últimos dos decenios se produjo el homicidio de más de dos mil sindicalistas y la desaparición forzada de por lo menos 138; hecho que ha quedado en la impunidad, pues en más del 90% de los casos, los responsables ni siquiera han sido puestos a disposición judicial.⁷ En el caso de las comunidades indígenas, mirando sólo el período 2006-agosto/2007 se registraron 160.102 indígenas pertenecientes a 23 pueblos que vieron vulnerados sus derechos. En promedio diario, se calcula que 46 de estas personas fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos, 54 fueron objeto de infracciones al DIH y 326 vieron conculcados sus derechos colectivos.⁸ En el caso de los periodistas, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el 2006 se registró un aumento del 50% en el número de periodistas asesinados, pasando de dos en el 2005 a tres en el 2006.⁹

- Una contrarreforma agraria de dimensiones insospechadas, que llevó a la concentración de las tierras en manos de narcoparamilitares; a la deforestación de miles de hectáreas en sectores que eran de propiedad colectiva de indígenas o afrocolombianos; a la ampliación de la llamada frontera agrícola, para su destinación a cultivos de uso ilícito o de monocultivos para la producción de biocombustibles.¹⁰ Informaciones recientes calculan en cerca de 130.000 las hectáreas con plantaciones de coca, 10.000 a 12.000 con amapola, y 8.000 a 10.000 con marihuana (Fajardo, 2007: 16). Siguiendo un estudio de IGAC-CORPOICA, Fajardo compara cifras de 1984 y 2001, y nos muestra el avance en la dinámica de concentración de la propiedad de las tierras, que lleva a un aumento porcentual de propietarios con menos de 5 hectáreas, en una propor-

⁷ Amnistía Internacional (s.f.).

⁸ Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO) (s.f.).

⁹ Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2006).

¹⁰ Para un ejemplo de las dimensiones del fenómeno y sus implicaciones frente a la dignidad y los derechos de las personas y los colectivos, véase el trabajo realizado por Human Rights Everywhere para la Coordination Belge pour la Colombie, sobre el flujo del aceite de palma (Mingorance, 2006).

ción de terreno disminuida, mientras se estrecha el porcentaje de propietarios con más de 500 hectáreas y aumenta el total porcentual de la superficie por ellos controlada.¹¹

- La afectación psico-social de amplios sectores sociales, y especialmente de las organizaciones y movimientos de carácter popular, cuyos tejidos sociales y salud mental personal y colectiva¹² se vieron fuertemente perturbados; de tal manera que se deterioró lo que algunos autores llaman *capital social*,¹³ haciendo referencia, entre otros aspectos, a la confianza, la solidaridad, la existencia de redes sociales y la participación, y se consolidó una sensación de inseguridad colectiva, propicia a formas de poder fuerte y aparentemente protectoras.

- La venta de varias empresas del Estado, especialmente las empresas de telecomunicaciones, servicios públicos, bancos y aseguradoras, a multinacionales en el llamado proceso de globalización económica, y la desregulación de los derechos laborales, con lo cual las conquistas de los trabajadores en cuanto a derechos laborales y prestaciones sociales se echaron por el suelo y se convirtieron en botín de empresas financieras.

- La consolidación de un Estado en manos del narcoparamilitarismo neoliberal, reflejado en: a) la elección y reelección de Álvaro Uribe Vélez (varios de cuyos ministros, embajadores, asesores están estrechamente vinculados al paramilitarismo); b) la conformación de un Congreso con mayorías de partidos políticos uribistas (muchos de ellos igualmente pertenecientes al paramilitarismo); c) el fortalecimiento del armamentismo oficial al servicio de los intereses de los sectores dominantes, y con una mejor imagen social al no haber, aparentemente, ejecutado directamente la masiva violación a los derechos humanos.

- La privatización de la educación y, por tanto, la exclusión de los más necesitados en el acceso a la misma, especialmente a la educación superior. Si bien en ciertos sectores, especialmente urbanos, se mostraba un avance en el cubrimiento de la educación básica, debido a las políticas sociales emprendidas durante varios años, estos avances se han desacelerado, debido al arribo de familias desplazadas que entran a competir por los servicios.

¹¹ Fajardo resume los datos de la siguiente manera: “En 1984 las fincas menores de 5 ha que correspondían al 65,7% de los propietarios, controlaban el 5% de la superficie; en 1996 representaban el 66,8% y controlaban el 4,3% de la superficie. En 2001, las fincas menores de 3 has, pertenecían al 57,3% de los propietarios y controlaban el 1,7% de la superficie. Entre tanto, para 1984 las fincas mayores de 500 ha correspondían al 0,5% de los propietarios y controlaban el 32,7% de la superficie; en 1996 pertenecían al 0,4% de los propietarios y controlaban el 44,6% de la superficie. En 2001 las fincas de más de 500 ha correspondían al 0,4% de los propietarios que controlaban el 61,2% de la superficie” (Fajardo, 2007: 18).

¹² Para una ampliación del tema, véanse Lancheros y Bello (2005) y AVRE (2006).

¹³ Véanse, por ejemplo, Putnam (2003) y Salej (2005).

Desde estas dinámicas del empobrecimiento y sus complejas consecuencias, que aquí sólo se refieren a las décadas más recientes, pero que por supuesto obedecen a procesos históricos de más largo aliento, es necesario ubicar los análisis sobre la significación de la acción social de las iglesias, advirtiendo que esta visión de la sociedad y de la pobreza no es necesariamente compartida por los pastores y líderes religiosos encuestados y que, por tanto, no se les podría hacer juicios de coherencia ética o política al respecto.

LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS IGLESIAS

En los inicios del estudio que sirve de fundamento a este artículo, se dio por sentado que la acción social no es ajena al imaginario de los actores estudiados y que, por tanto, se relaciona no sólo con los actos y proyectos que se realizan, sino con las percepciones que estos actores tienen sobre el mensaje social de su libro sagrado y sobre la realidad sociopolítica del contexto. Por tanto, se diseñó un instrumento de recolección de información que se refiriera a tres grandes aspectos: la percepción bíblica, la percepción de la problemática social y las características mismas de las acciones sociales en desarrollo. A continuación, sin entrar en todos los datos arrojados por el mencionado estudio, se destacan algunas tendencias relevantes con respecto a los dos primeros aspectos, y luego se desarrolla un poco más ampliamente la caracterización de la acción social.

En cuanto a las relaciones entre el uso de textos bíblicos y la realización de acciones de carácter social, cabe destacar las siguientes conclusiones:¹⁴

- La lectura de los textos bíblicos y su uso en las predicaciones no parece incidir positivamente en la generación de una acción social de las iglesias. Las tendencias en la frecuencia de uso de los textos bíblicos no presenta mayor variación entre quienes tienen proyectos de acción social y quienes no los tienen. La única incidencia que parece estar dándose es inhibitoria, y se refiere a la importancia concedida a los textos apocalípticos que, por supuesto, se debe estar haciendo desde teologías milenaristas. En efecto, mientras el uso del texto del Apocalipsis es reportado como mediano, alto o muy alto, por el 74,1% de quienes no tienen proyectos sociales, la misma cifra sólo alcanza el 65,6% entre quienes sí los tienen.
- Por otra parte, el personaje de Pablo, quien es para los encuestados, después del de Jesús, el personaje más atractivo de la *Biblia*, asume una especial significación como legitimador de la obediencia a las autoridades. En efecto,

¹⁴ En este artículo sólo se mencionan algunas de las conclusiones más pertinentes del estudio.

el 66,8% de los encuestados afirma utilizar con alta o muy alta frecuencia el texto de Rm. 13, 1-7, encabezado por el pasaje que dice:

Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no pro venga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación.

Entre tanto, el texto de I Cor. 5, considerado como de autoría del mismo Pablo y colocado dentro del mismo listado de opciones, sólo tiene el mismo grado de utilización para el 28,7% de los encuestados. Dicho texto se refiere a los incestuosos y los impuros. A pesar del moralismo individualista característico de muchas de las predicaciones cristianas, resalta que se cite con más frecuencia un texto sobre la obediencia a las autoridades que uno sobre los incestuosos. Ello nos muestra una clara intención de uso de los textos bíblicos en la consolidación del orden social existente, y un cuestionamiento hacia quienes propongan cambios que son considerados rebeldes y, por tanto, condenados por Dios. La significación de un dato como éste, en un país cuya compleja conflictividad hemos resaltado, indica muy claramente el imaginario del que buena parte de los miembros de las iglesias disponen para leer a los actores sociopolíticos y a las acciones encaminadas a generar cambios en las estructuras sociales.

Con respecto a las representaciones que los líderes de las iglesias cristianas locales tienen sobre la sociedad, vale destacar solamente algunos hechos:

- Al proponer una lista de personajes históricos, cuya imagen podría influir positivamente en la acción social de las iglesias, los encuestados prefirieron a Bolívar y Martin Luther King, dentro de un listado en el que se encontraban igualmente Bush, el Ché Guevara, Gandhi, Napoleón y Washington. Los participantes añadieron personajes adicionales, dentro de los cuales curiosamente se destaca la religiosa católica Teresa de Calcuta.

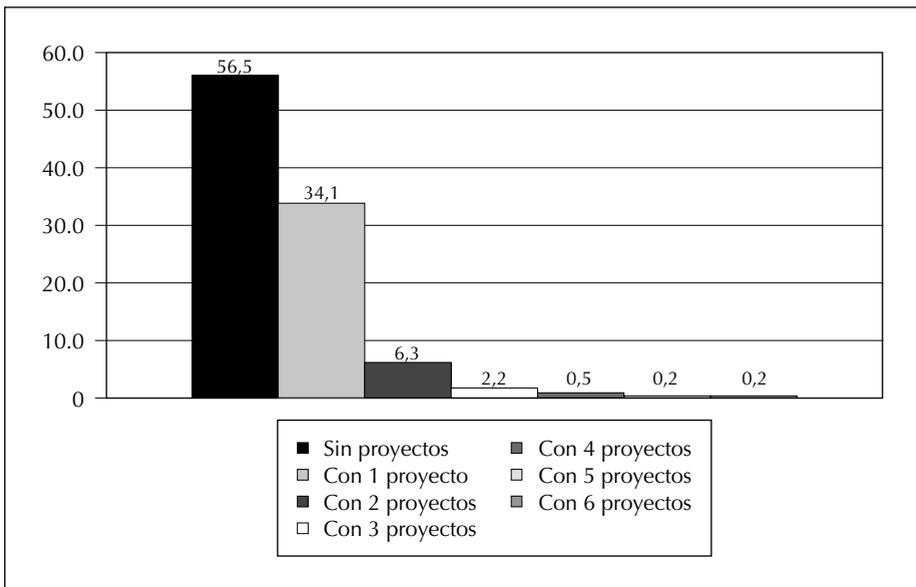
- En una calificación de hechos sociales sobre un listado de 16 fenómenos sociales, los encuestados determinaron que los fenómenos más perjudiciales para la sociedad son, en orden descendente: la idolatría (87,3%), la corrupción política (85,0%), la desintegración familiar (80,2%) y el narcotráfico (79,7%). Allí también estaban mencionados la guerra, la indiferencia frente a los necesitados, el desempleo, la inequitativa distribución de la tierra, entre otros, que son calificados negativamente, pero en proporciones mucho menores. Se nota, pues, una tendencia bastante individualista y moralizante de la sociedad, y poca valoración de los mecanismos estructurales de la pobreza.

- En el mismo ejercicio, alcanzan los niveles más altos como acciones benéficas o muy benéficas para la sociedad, las jornadas de oración (97,2%) y las campañas evangelísticas (94,0%), lo cual puede explicarnos las razones por las cuales no hay un compromiso social activo.

En relación con las características de las actividades concretas de carácter social, desarrolladas por las iglesias evangélicas, el mencionado estudio pretendió determinar la proporción de iglesias cristianas evangélicas que tienen proyectos sociales, y algunas particularidades de los proyectos, tales como cantidad, duración, beneficiarios.

El 56,5% de las iglesias encuestadas contestaron no tener proyectos sociales, y dentro del 43,5% restante, el número de proyectos es reducido, tanto en cantidad como en tiempo de duración de los mismos. El gráfico 2 presenta las proporciones respectivas, permitiendo afirmar, en síntesis, que aproximadamente de cada 10 iglesias sólo 4 tienen proyectos de acción social. Entre ellas, 3 tienen únicamente un proyecto y solamente una tiene más de uno.

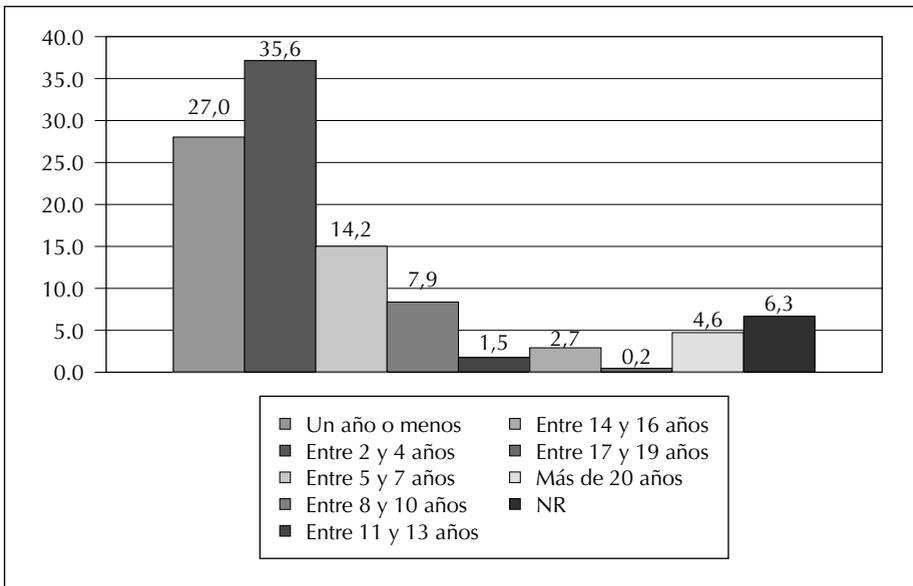
Gráfico 2
Distribución porcentual según cantidad de proyectos realizados por iglesias



Fuente: este estudio.

Si miramos la antigüedad de los proyectos, nos encontramos con las respuestas representadas en el gráfico 3.

Gráfico 3
Antigüedad de los proyectos existentes



Fuente: este estudio.

Es decir que de cada 10 proyectos existentes, aproximadamente tres tienen menos de un año, cuatro tienen entre dos y cuatro años, y dos están entre los cinco y los 10 años de existencia. Ello puede significar que hay una relativamente reciente preocupación por la acción social, o que los proyectos no tienen gran continuidad, porque no logran mantenerse o porque responden a situaciones coyunturales, sin proyectarse a mediano o largo plazo. La proporción de 6,0% de *No Respuesta* resulta un poco alta en comparación con otras preguntas, y puede responder fundamentalmente a que los actuales responsables de los proyectos no fueron sus iniciadores.

Al clasificar las áreas de atención en las que se concentran las acciones sociales de las iglesias, podemos tener indicativos acerca de cuáles son aquellos aspectos que constituyen la mayor preocupación de los líderes de las iglesias evangélicas. Será necesario relativizar los resultados, relacionándolos con otras variantes, como la oferta de ayuda institucional o las estrategias de cooptación de miembros, pero, de todas maneras, para el tema que nos convoca, da indicios de cómo se considera la pobreza o, por lo menos, de los actos de respuesta a la misma. En el mencionado estudio se decidió establecer cuatro grandes tipos

de acciones: condiciones de vida, desarrollo socioeconómico, intervención sociopolítica y convivencia social.¹⁵

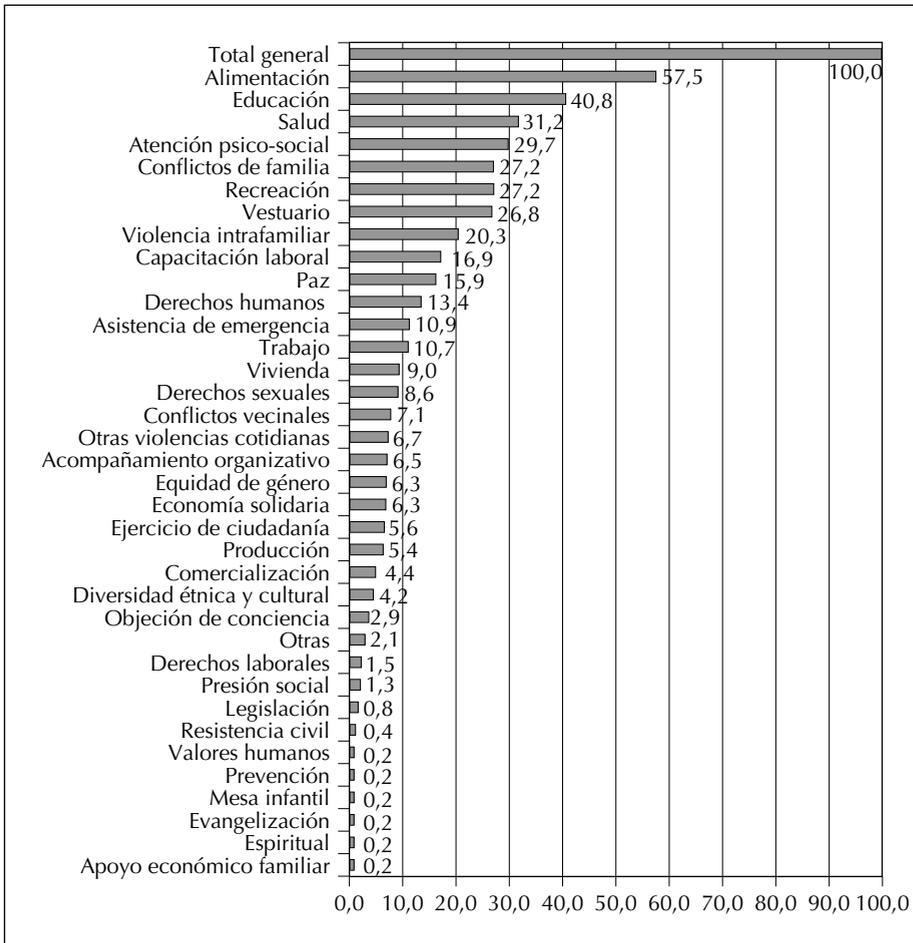
Si consideramos en primera instancia los aspectos que se pretende cubrir con cada uno de los proyectos, podemos resaltar, de acuerdo con el gráfico 4, que hay una alta concentración de las actividades en la oferta de alimentación, señalada por el 57,5% de los proyectos existentes. Esta concentración de proyectos se explica por varias razones de diferente origen. Por una parte, por una estrategia pastoral: se llega a las familias por medio de los niños; por otra parte, por la facilidad de condiciones financieras y logísticas, puesto que se consiguen mejores ayudas para este tipo de proyectos, y constituyen un apoyo inmediato y fácilmente aceptado por las comunidades. De hecho, varios de los proyectos son comedores infantiles, subsidiados por el Estado.

Un segundo grupo de aspectos atendidos por los proyectos de manera destacable está constituido por la educación, la salud, la atención psico-social, los conflictos intrafamiliares y la recreación. Entre tres y cuatro de cada diez proyectos señalan estar atendiendo dichos aspectos. Como se puede percibir, se trata fundamentalmente de necesidades básicas, que constituyen una responsabilidad del Estado. Es necesario señalar que una de las estrategias de inserción de las iglesias de origen extranjero estuvo precisamente en la fundación de colegios y de puestos de salud. La atención a los conflictos familiares responde a la prioritaria preocupación de la moral judeocristiana por la estabilidad de las familias estructuradas según la visión occidental. Y la atención psico-social puede responder en primera instancia a las consecuencias del conflicto, pero también a que varios de los proyectos son colegios, y en principio estos deben tener un servicio de psicología para los miembros de la comunidad.

El bajo rango en que son señalados los otros aspectos muestra que no hay propiamente ni una visión de desarrollo que lleve a aumentar los ingresos, la productividad o, en general, el crecimiento económico, y menos una perspectiva de incidencia política. La pobreza, podríamos entonces deducirlo, es leída como una situación accidental, que merece la atención de algunos, pero no hace relación con el poder, ni con los derechos.

¹⁵ En la categoría *condiciones de vida* se incluyeron los siguientes ítems: alimentación, asistencia de emergencia, atención psicosocial, educación, recreación, vestuario, vivienda y salud; en *desarrollo socioeconómico* se incluyeron: comercialización, derechos laborales, economía solidaria, producción, trabajo y capacitación laboral; en *intervención sociopolítica* se involucraron: acompañamiento organizativo, ejercicio de ciudadanía, derechos humanos, legislación, objeción de conciencia, paz, política partidista, presión social y resistencia civil; y, finalmente, en *convivencia social* se incorporaron: conflictos vecinales, conflictos de familia, derechos sexuales y reproductivos, diversidad étnica y cultural, equidad de género, violencia intrafamiliar y otras violencias cotidianas.

Gráfico 4
Aspectos atendidos según porcentaje sobre total de proyectos

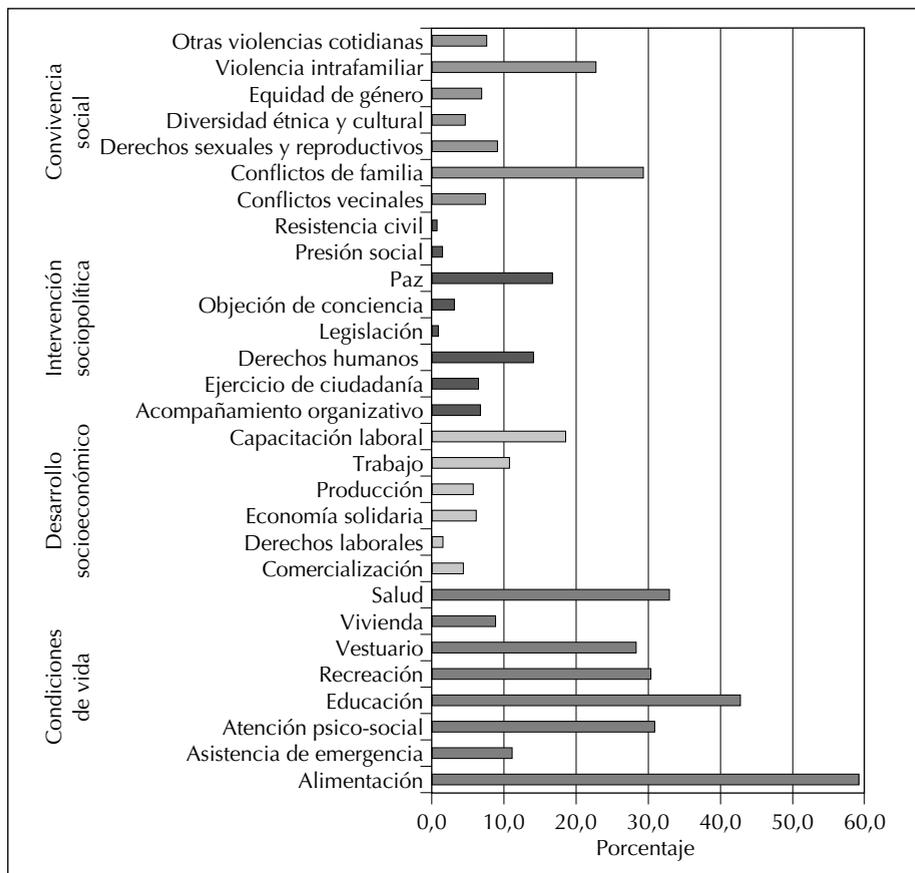


Fuente: este estudio.

Este planteamiento se ratifica al considerar las respuestas en la clasificación según las cuatro tipologías anunciadas anteriormente y presentadas en el gráfico 5.

Es evidente que la categoría que concentra los más altos porcentajes de atención es la de *condiciones de vida*. En segundo lugar se ubican las tipificadas como *convivencia social*, en donde se acentúan las referidas a la armonía familiar. Mientras que las categorías *desarrollo socioeconómico* e *intervención sociopolítica* denotan poca atención.

Gráfico 5
Líneas de atención de proyectos vigentes según categorías



Fuente: este estudio.

No son despreciables las actividades relacionadas con la paz y el trabajo en Derechos Humanos (15,9% y 13,9%), que si bien pueden considerarse insuficientes desde una perspectiva de derechos y de superación de la pobreza como generación de condiciones de equidad y participación, pueden ser asumidos como pasos iniciales y como apertura a nuevas iniciativas. Sin embargo, exceptuando estos dos ítems, las demás actividades clasificadas como *intervención sociopolítica* manifiestan dedicaciones casi nulas. No aparece en el gráfico la política partidista, a pesar de estar mencionada dentro de las opciones, pues no recibió ninguna mención. En todo caso, es necesario resaltar que estos resultados son sobre encuestas hechas a pastores de iglesias locales, y, por tanto, no se están considerando aquí, ni las acciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) de inspiración confesional, ni el trabajo de agencias

de cooperación internacionales, ni las acciones de partidos políticos nacidos dentro de los movimientos evangélicos o protestantes.¹⁶

Indicadores adicionales sobre las características de la actividad de las iglesias evangélicas con respecto a lo social hacen alusión a los beneficiarios. Dentro de la tipología resalta una muy amplia dedicación de los trabajos a los niños, que son atendidos por prácticamente la mitad de los proyectos existentes (47,1%). Este alto nivel de atención a la infancia es coherente con los demás análisis que veníamos haciendo, y cuya explicación se centra en las estrategias de evangelización por medio de la educación y la incidencia en la infancia. Las mujeres cabeza de hogar ocupan el segundo lugar en dedicación, alcanzando la atención del 25,5% de los proyectos, y los jóvenes el 22,6%. Se trata, pues, de una atención a personas consideradas especialmente vulnerables dentro de la sociedad, pero también con incidencia en el futuro de la labor de las iglesias, por lo cual la motivación puede leerse como influida por intereses proselitistas de las mismas iglesias, más que por la intención de servicio, ayuda o solución a un problema social.

Resaltan luego, en el orden de atención, los desplazados y los desempleados, que son atendidos por el 18,6% y el 18,4% de los proyectos, respectivamente, y que apuntan a problemas relevantes dentro de las condiciones de empobrecimiento y justicia social desde el punto de vista socioeconómico. Es necesario resaltar que el desplazamiento interno masivo por violencia sociopolítica constituye el fenómeno más relevante desde el punto de vista de la violación de derechos humanos, de empobrecimiento y de consolidación de estructuras de dominación que se ha producido en el país durante las últimas décadas. Las cifras, como ya se ha señalado, ascienden a más de cuatro millones de casos de personas que han tenido que abandonar su lugar de residencia y de trabajo, dejando que los territorios, los bienes y las poblaciones caigan bajo el dominio de los actores violentos, armados y no armados.¹⁷ Con la atención al fenómeno del desplazamiento y del desempleo, que según los encuestados constituyen áreas atendidas por prácticamente dos de cada diez proyectos existentes, se estaría dando respuesta a dos de las expresiones de pobreza e inequidad más relevantes y de mayor incidencia. Por supuesto, un mejor juicio sobre este he-

¹⁶ En diferentes momentos, especialmente durante las dos últimas décadas, se ha dado la participación de partidos políticos directamente representativos de iglesias protestantes y evangélicas en las contiendas electorales. Si bien, inicialmente, estos esfuerzos tienden a la búsqueda de una equidad en el reconocimiento de los derechos con respecto a los católicos.

¹⁷ Una muy amplia y variada bibliografía sobre el tema se ha producido en el país, contemplando el problema desde perspectivas disciplinarias, regiones, tipos de población, tipos de respuesta, etc. diferentes. Baste con citar los dos volúmenes de compendios de importantes trabajos realizados durante varios años: Codhes (1999 y 2003).

cho merece análisis y datos más profundos y más cualitativos. La observación participante y el análisis de la atención a la población desplazada en el país (Lozano y Osorio, 2006; CODHES, 1999 y 2003), permiten afirmar que no se pasa de la atención de emergencia.

Para la valoración de las actividades de carácter social de las iglesias importa igualmente considerar la cantidad de beneficiarios. Varios hechos son destacables: una significativa proporción de proyectos —uno de cada diez— no sabe responder cuántos son sus beneficiarios; lo cual es indicativo del grado de informalidad con el que se trabaja, y permite suponer que las iniciativas salen de la buena voluntad y sensibilidad, sin mucha preparación ni reflexión sobre las implicaciones e impactos reales. El 55% de los proyectos atienden menos de 100 personas. Entre ellos tres de cada diez atienden entre 11 y 50 beneficiarios, y dos de cada diez atienden entre 51 y 100. El 36% atienden más de 100 personas. Estos últimos pueden estar relacionados fundamentalmente con colegios. La proporción es variada, y no teniendo una tasa de comparación según el número de miembros de las iglesias o la relación con la población necesitada en las localidades atendidas, no podemos hacer análisis más profundos.

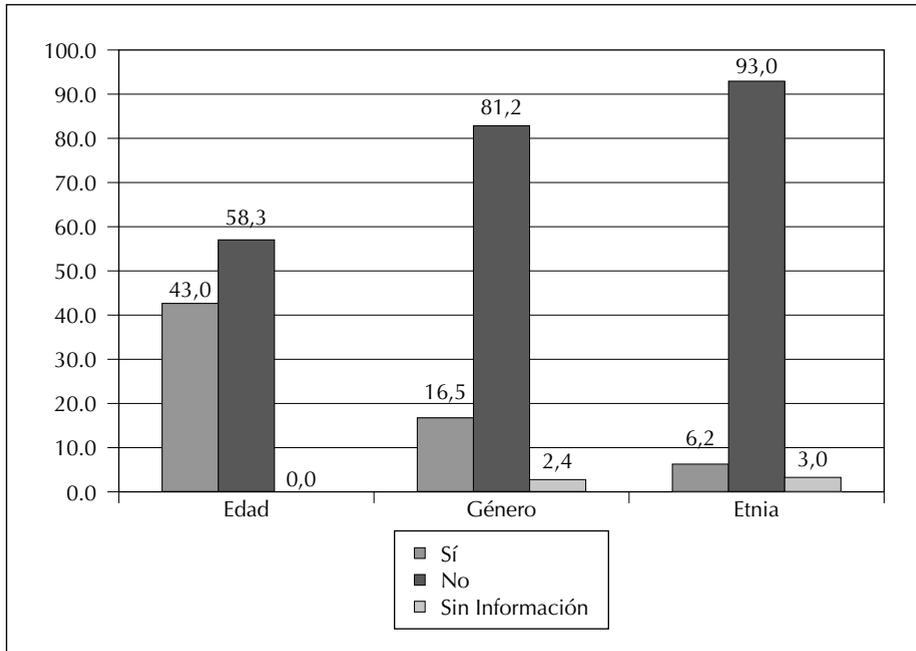
En cambio, podemos encontrar un indicativo muy importante de la comprensión de la justicia social en las perspectivas diferenciales, con las cuales son o no abordados los proyectos. Se trata, pues, de mirar si se tiene la intención de responder a las necesidades diferenciadas de los usuarios, con criterios de equidad y de derecho, según edad, género y etnia. Como se puede observar en el gráfico 6, las perspectivas diferenciales no se tienen casi en cuenta en la realización de los proyectos. A diferencia de la edad cuya explicación se encuentra en el ya mencionado hecho de la alta proporción de colegios entre los proyectos de las iglesias, la respuesta es en alto grado negativa.

La baja acogida que tienen las perspectivas de edad, género y etnia son, por una parte, indicativas de la inadecuada capacidad y conocimientos de los miembros de las iglesias para una más competente intervención social; y, por otra, manifiestan cierto ostracismo, ya que en el medio institucional, tanto estatal como de la sociedad civil, estas perspectivas se imponen como algo indispensable.

Datos básicos sobre la financiación de los proyectos sociales de las iglesias, que podrían aportar elementos de análisis con respecto a los grados de autonomía, no son fáciles de recoger. La información arrojada por el estudio en mención habla de que el 74,7% de los proyectos registran, como origen de los recursos, las mismas iglesias locales; mientras un 46,3% reconocen orígenes en donaciones personales; un 25,1% reconocen orígenes de instituciones nacionales o locales; y un 16,7% reconoce orígenes internacionales. Dentro de las proporciones de estos orígenes en el total de los recursos de los proyectos,

cabe destacar que la mitad de aquellos que manifiestan aportes internacionales, afirman que esos aportes superan el 75,0% de los recursos del proyecto. Mientras que dentro de los que reconocen orígenes en la propia iglesia, casi la mitad afirma que esos orígenes constituyen el 75% de los ingresos para los proyectos. Estas informaciones y otros datos no transcritos aquí permiten afirmar que hay marcadas diferencias entre unas iglesias y otras: mientras unas tienen una alta dependencia de los recursos externos, otras mantienen sus obras prácticamente con sus mismos recursos, aunque en general todas reciben aportes de distintos orígenes. Sería necesario relacionar estos datos con el número, la duración y la orientación de los proyectos, pero por ahora no disponemos de dicha información.

Gráfico 6
Perspectivas diferenciales



Fuente: este estudio.

REFLEXIONES FINALES

Es bien conocida la extendida acusación que ha sido formulada contra la religión, y de manera muy concreta contra las iglesias evangélicas, no sólo en Colombia sino en América Latina, por su carácter enajenante de las personas

y de los colectivos sociales, apartándolos de las búsquedas por la construcción de una sociedad más equitativa. Los datos empíricos recogidos, más que negar o afirmar dicha acusación, aportan algunos fundamentos a los análisis, dejando ver tanto la existencia de proyectos sociales esparcidos en todo el territorio, como varios de sus límites y vacíos.

Basándonos no sólo en el estudio mencionado, sino en otras informaciones producto de un trabajo de campo de varios años, dirigido específicamente a las mentalidades y los imaginarios religiosos sobre el desplazamiento forzado,¹⁸ se van a hacer algunas reflexiones analíticas conclusivas.

Es necesario comenzar por resolver una pregunta formulada durante el evento que llevó a esta publicación, y que se refería a la consideración de si las iglesias tendrían la responsabilidad de actuar frente a la pobreza o no. La pregunta, como yo la interpreto, se refiere, por una parte, a la consideración de que la solución de los problemas sociales es una responsabilidad del Estado; y, por otra parte, a la posible consideración de lo religioso como autónomo e independiente de lo político y referido a las creencias sobrenaturales, y por lo tanto no necesariamente vinculado a la solución de problemas materiales. Se podría entonces concluir que a las iglesias no se les puede exigir la participación en proyectos de superación de las condiciones y los mecanismos generadores de la pobreza, pues ello no corresponde directamente a su misión, y en la medida en que lo asumen, estarían favoreciendo que el Estado no cumpla con sus responsabilidades. La lógica de esta reflexión parece impecable. Pero hay varios implícitos y supuestos que es necesario dilucidar.

Los Estados democráticos, como resultado de un supuesto contrato social de personas en igualdad de derechos y encaminados a garantizar a todos sus miembros la seguridad, el bienestar y la convivencia fraterna, no existen; existen como mecanismo de poder de los dominadores, sean estos poderes internos, externos o, lo que es más común, una alianza estratégica de los dos. En algunos casos más que en otros se permiten algunos mecanismos de incidencia y de participación ciudadana, con lo cual dichos Estados ganan legitimidad o, en otros términos, garantizan simbólicamente la hegemonía de los sectores dominantes. En realidad, la posibilidad de incidencia de los ciudadanos corrientes en la toma de decisiones, especialmente en aquellos asuntos gruesos de política económica y social, es prácticamente nula. En este contexto, los servicios de educación, salud, seguridad, etc., que debe prestar el Estado se convierten en formas e instrumentos de poder y dominación sobre los sectores subalternos. Eso nos lleva a tener cuidado sobre qué estamos defendiendo y legitimando cuando alegamos las responsabilidades del “Estado Social de Derecho”. Con

¹⁸ Fabio Lozano (2004).

esto no pretendo colocarme del lado de la posición neoliberal que privatiza la prestación de dichos servicios, minimizando el papel del Estado, sino mostrando que mientras el Estado esté en manos de unas cuantas elites de poder, la política social será simplemente un instrumento de dominación. En la medida en que tenemos conciencia de esta situación, nos colocamos ante la disyuntiva de buscar que los Estados que no son “suficientemente” democráticos se “modernicen”, cumpliendo con la atención a las necesidades sociales que les corresponden, con lo cual según algunos se contribuiría a legitimar su poder, o bien de generar espacios alternativos a ese Estado, creando formas de resistencia y de autonomías variadas. En ambos casos la participación de las iglesias no estaría negada, sino que debería estar orientada a la incidencia política en las acciones del Estado, o a la creación, impulso o fortalecimiento de espacios alternativos de resistencia y autonomía.

Seguramente, algunos herederos del pensamiento liberal burgués, defensor del estado laico, sigan pretendiendo la “neutralidad” de las iglesias y de la religión frente a la política. Pero, además de la contradicción entre el ser individual y el ser colectivo que esto implicaría para los ciudadanos, y que ya ha sido ampliamente debatida en las ciencias sociales, es necesario reconocer que en las prácticas cotidianas, las iglesias de todas maneras inciden en y se ven afectadas por esos Estados, y no permanecen ajenas a los eventos de carácter político, económico y social que se dan a su alrededor. Hacen parte, pues, de los mecanismos de estructuración social y, en concreto, de reproducción o superación de la pobreza. La discusión sobre si participan o no, no tiene mayor sentido. El problema es, más bien, cómo participan y a favor de quiénes. Y, para el caso, la pregunta apunta a saber si sus acciones están en favor de los derechos de los más necesitados o no.

Ahora bien, si confrontamos el análisis de la situación de pobreza en el país y la breve mirada a la reciente expresión de los mecanismos de empobrecimiento, con las acciones de las iglesias evangélicas, podríamos concluir que la labor de las iglesias está lejos de incidir de manera positiva en el freno o el desmonte de dichos mecanismos; no solamente porque los proyectos existentes no alcanzan a incidir, por su orientación y por su capacidad administrativa, sino porque en realidad no se contemplan dichos mecanismos y no se pretende afectarlos. En realidad, de acuerdo con la información arrojada por este estudio, son muy pocas las iglesias que buscan responder a las necesidades de los pobres, y en muchos de los pocos casos en los que sí lo hacen, hay una alta concentración en medidas de emergencia y supletorias de la labor del Estado en el ámbito de la educación y la salud. Medidas que además se asumen por muchos como una estrategia proselitista, más que como un acto de solidaridad y de servicio. Pero

cuando se trata de incidir en las políticas y en las estructuras empobrecedoras, la acción de las iglesias es prácticamente nula.

Podemos, por otra parte, frente a la pregunta de si deben o no las iglesias tener acciones directamente relacionadas con la solución de la pobreza social, responder desde las creencias mismas que ellas afirman sostener; en este caso, desde el mensaje del Evangelio. Hay una cuestión de carácter ético y, para los creyentes cristianos, de carácter moral, que está por encima de los tecnicismos politológicos con respecto a quién le corresponde la responsabilidad de la superación de la pobreza. Frente al dolor de las víctimas, frente a la interpe-lación veterotestamentaria “¿Dónde está tu hermano?”, no se puede responder: “¿Acaso soy yo responsable de mi hermano? Eso es responsabilidad del Estado”. Esta respuesta iría contra los principios más elementales del judeo-cristianismo. Además, son igualmente conocidos los radicales textos del Nuevo Testamento con respecto al amor al prójimo, al reconocimiento del rostro de Dios en los más necesitados, el sermón de la montaña, etc., para no hablar de la construcción de la religión de Israel ni de la primera comunidad cristiana, que ha sido profundamente expuesta por la Teología de la Liberación. Habría, entonces, razones de peso para afirmar la obligación de las iglesias para actuar frente a la pobreza.

Si suponemos que la afirmación del cristianismo exige de las iglesias, como colectivo, y de sus miembros individualmente considerados, la participación en la construcción de relaciones y condiciones sociales de mayor fraternidad y solidaridad, la constatación más evidente es que la acción social de las iglesias evangélicas es ciertamente muy reducida. Hay cierto dinamismo y entusiasmo de personas y de iglesias. Pero es necesario aceptar, frente a los datos recogidos, que este dinamismo es incipiente, respondiendo en general a iniciativas no articuladas entre sí, y que internamente no acumulan experiencia, pues no tienen mecanismos de sistematización y seguimiento.

A ello es necesario agregar que la preparación y dedicación de los agentes de acción social no es la más adecuada, no porque estos agentes no tuvieran formación profesional y fueran personas extraídas de sectores sociales marginados y sin educación, sino porque no tienen formación explícita para la orientación y la gestión de proyectos sociales. Se hace evidente, por ejemplo, que los trabajos en el ámbito social emprendidos por las iglesias no responden suficientemente a análisis fundamentados sobre las necesidades del país, de las regiones o de los posibles beneficiarios; tampoco se están leyendo las posibilidades de participación como sujetos sociopolíticos de los miembros de comunidades y sectores sociales con diferencias y necesidades de género, etnia, religión o edad. Si a ello le agregamos que no existe una infraestructura institucional que impulse

el fortalecimiento de las iglesias para dar respuesta desde el evangelio¹⁹ a los retos planteados por las realidades de empobrecimiento e inequidad, nos encontramos ante un panorama poco optimista.

Hay que reconocer, con base en informaciones adicionales al estudio estadístico mencionado, en primer lugar, que existen diferencias importantes entre unas iglesias y otras, especialmente entre las iglesias protestantes históricas y los movimientos más recientes; y que dentro de aquellas, especialmente en la iglesia anglicana, los menonitas y la iglesia luterana, se da una especial preocupación por generar acciones de incidencia en la construcción de la paz, en la generación de mayores equidades sociales y en la atención a víctimas de la violencia sociopolítica. Y, en segundo lugar, que buena parte de las acciones sociales de las iglesias evangélicas se hacen no desde las iglesias locales, que fueron las contempladas en el estudio, sino desde instancias intereclesiales o instituciones de ámbito nacional, regional e incluso internacional. Ello haría parte de otros análisis.

Por ahora, lo relacionado hasta aquí plantea urgentes desafíos a las ciencias sociales en el ámbito del desarrollo de una conciencia social más crítica, la formación de los agentes, la sensibilización y motivación de los miembros de las iglesias, el desarrollo de capacidades de gestión, la sistematización crítica de experiencias, la consolidación de redes de apoyo e intercambio.

BIBLIOGRAFÍA

- ACNUR (2005). *Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 2002-2004*. Bogotá: ACNUR.
- Amnistía Internacional (s.f.). *Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones y amenazas de muerte*. Disponible en <<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230012007>>. Último acceso, 19 de febrero de 2008.
- Bastian, Jean-Pierre (1997). *La mutación religiosa de América Latina*. México: FCE.
- Bidegain, Ana María (2004). *Historia del cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad*. Bogotá: Taurus.
- CODHES (ed.) (1999). *Un país que buye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada*, Vol. I. Bogotá: UNICEF/CODHES.
- _____ (2003). *Un país que buye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada*, Vol. II. Bogotá: UNICEF/CODHES.

¹⁹ Fabio Lozano (en imprenta). *Acción social de las iglesias evangélicas en Colombia. Una aproximación estadística*.

- _____ (2006). *Tutelando los derechos. Respuestas institucionales y sociales al desplazamiento forzado*. Bogotá: CODHES.
- Contraloría General de la República (2004). *Coincidencias y diferencias en la estimación de la pobreza*. Disponible en <www.contraloriagen.gov.co>. Último acceso, 29 de septiembre de 2007.
- Corporación AVRE (ed.) (2006). *Integración de abordajes y acciones psicosociales en la asistencia jurídica a víctimas*. Bogotá: AVRE.
- De Sousa Santos, Boaventura (1999). *La globalización del derecho*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ILSA.
- Escobar, Arturo (1998). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá: Norma.
- García Canclini, Néstor (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la Modernidad*. México: Grijalbo.
- Girard, René (1998) [1972]. *La violencia y lo sagrado*. Barcelona: Anagrama.
- Gruzinski, Serge (1999). *La pensée Métrisse*. Paris: Fayard.
- Holloway, John (2002). *Cambiar el mundo sin tomar el poder*. Buenos Aires-Puebla: Herramienta-Universidad Autónoma de Puebla.
- Houtart, François (2004). “La religión en los procesos sociales: reencantar el mundo por el símbolo y la ética”, en *Globalización religiosa y neoliberalismo*. México: Publicaciones para el Estudio de la Religiones-CIPS-Departamento de Estudios Socio-Religiosos.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) (2005). *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*. San José: IIDH.
- Lancheros, Dora y Martha Bello (2005). *Acompañamiento psicosocial y atención humanitaria en el contexto colombiano*. Bogotá: AVRE.
- Le Bot, Yvon (1995) [1992]. *La guerra en tierras mayas*. México: FCE.
- Lévinas, Emmanuel (1997) [1971]. *Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad*. Salamanca: Sígueme.
- Lozano, Fabio (2004). “Entre l’accommodation et la résistance. Des imaginaires religieux aux dynamismes de reconstruction vitale de victimes déracinées par la violence socio-politique en Colombie”, en Ewa Bogalska-Martin (dir.), *Victimes du présent, victimes du passé*. París: L’Harmattan.
- _____ (en imprenta). *Acción social de las iglesias evangélicas en Colombia. Una aproximación estadística*.
- Lozano, Fabio y Flor Edilma Osorio (1998). *De víctimas del desplazamiento a constructores de vida*. Bogotá: IER-ACPO.
- _____ (2006). “La política pública ante el desplazamiento forzado, las tierras y el territorio”, en CODHES (ed.), *Desplazamiento forzado y política pública. Análisis sectorial*. Bogotá: CODHES.

- Mardones, José María y Reyes Mate (eds.) (2003). *La ética ante las víctimas*. Barcelona: Anthropos.
- Marzal, Manuel (2002). *Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa en América Latina*. Madrid: Trotta-Pontificia Universidad Católica de Perú.
- Mingorance, Fidel (2006). *El flujo de aceite de palma, Colombia-Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos*. Bogotá: Human Rights Everywhere, Coordination Belge pour la Colombia. Disponible en <<http://www.herv.org>>.
- Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2006). *Situación de derechos humanos y DIH*. Bogotá: Vicepresidencia de la República. Disponible en <<http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/indicadores/2006/diciembre2006.pdf>>.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2003). *El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia 2003*. Bogotá: PNUD.
- Putnam, Robert David (ed.) (2003). *El declive del capital social: un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario*. Barcelona: Nueva Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores.
- Salej Higgins, Silvio (2005). *Fundamentos teóricos do capital social*. Chapeco: Argos Editora Universitaria.
- Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO) (s.f.). Disponible en <www.onic.org.co>.